OJEADA HISTORICA A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ESPAÑA

por

Ricardo González Castrillón

ABRIL 2001
NUMERO 01/11
Editado e impreso por la Univ. Rey Juan Carlos
Distribuido por la Bca. de la Univ. Rey Juan Carlos
C/ Tulipán, s/n. 28933 Móstoles (Madrid)

Depósito legal: M-31.455-1999 ISSN 1575-5894
OJEADA HISTORICA A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ESPAÑA

por

Ricardo González Castrillo

Abril de 2001
Ojeada histórica a las bibliotecas escolares en España

Ricardo González Castrillo

Voces autorizadas, buenas conocedoras de la situación en que se encuentran las bibliotecas escolares en la España actual, han llegado a negar recientemente la existencia de este tipo de bibliotecas en nuestro país, si por ellas debe entenderse –como sería lo correcto- unos centros con locales específicos y fondos variados, atendidos por profesionales competentes durante un horario adecuado¹. Pese a esta consideración, quizá acertada pero sin duda altamente destructiva, lo cierto es que los sucesivos responsables del Ministerio de Educación y de diferentes autonomías, vienen desarrollando desde hace algunos años toda una serie de experiencias piloto en distintas localidades –Cataluña, Salamanca, Madrid, Canarias, Zaragoza- fallidas unas, pero en marcha otras, tendentes a la implantación de la biblioteca escolar, convencidos de la alta función educativa reservada a estos centros, complementaria de la que ejerce la propia escuela. Ahora bien, bueno es reconocer para no pecar de ilusos, que el camino a

recorrer en este sentido es tan largo que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por las administraciones central y periféricas, no es fácil prever la instauración de la biblioteca escolar en el sistema educativo español como una realidad próxima en el tiempo. Es más, muy probablemente deberán transcurrir todavía buen número de años hasta ver a la biblioteca escolar finalmente asentada en nuestro país, con entidad y personalidad propias, y con un futuro libre de incertidumbres. Si este objetivo se logra algún día, habrán culminado entonces las iniciativas y afanes de las personas que, muchos años atrás, pusieron su empeño en esta tarea y se dedicaron a ella con entusiasmo. Porque no se crea que los esfuerzos por instaurar las bibliotecas escolares en el sistema educativo español es un proyecto reciente, ni siquiera nacido hace unos pocos años. La historia —o, más bien, la protohistoria- de las bibliotecas escolares en España se remonta en realidad a la década de los años treinta del siglo veinte recién expirado, incluso, diríamos que arranca de más lejos: la 2ª mitad de la centuria anterior, cuando Claudio Moyano, titular a la sazón del Ministerio de Fomento, promulgó —en 1857— su ley de Instrucción Pública, que no sólo marcó un hito en su tiempo declarando obligatoria la primera enseñanza, entre otras disposiciones, sino que influyó durante muchos años en el campo de la educación y también en el de las bibliotecas, a cuya regulación dedicaba varios de sus artículos. Años después, en 1869, otro ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, en su deseo de mejorar la calidad de la enseñanza primaria, ordenaba a comienzos del citado año que se crearan bibliotecas populares en las escuelas, persuadido de que la consulta de los libros habría de ampliar los conocimientos de alumnos y docentes. Establecía que la atención de dichas bibliotecas estuviera al cuidado de los maestros, y su
organización bajo la competencia de diputaciones y ayuntamientos, instituciones de las que dependía, por otra parte, toda la enseñanza pública. Sólo un relativo éxito acompañó, sin embargo, a esta medida pues si bien llegaron a crearse un cierto número de pequeñas bibliotecas, su impacto, en general, no fue el esperado. En algunos casos, debido a la falta de interés hacia la lectura mostrada por el pueblo, y en otros, por la desidia de quienes, debiendo ocuparse de fomentar ese interés, desatendían, por el contrario, tales bibliotecas y ni siquiera ponían al público los lotes de libros recibidos.

También en esa 2ª mitad del siglo XIX, y más concretamente en 1876, nacía en España una institución de carácter laico y progresista, de base Krausista, llamada a desempeñar, al correr de los años, un papel de enorme importancia en el orden educativo. Nos estamos refiriendo a la Institución Libre de Enseñanza, cuyos dos primeros directores fueron hombres de la talla intelectual de Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, quienes se propusieron como objetivo lograr la reforma social mediante la reordenación del sistema educativo. En otras palabras, veían en la reforma pedagógica el instrumento más idóneo para realizar el cambio social\(^2\). La Institución Libre de Enseñanza ejerció una gran influencia en el pensamiento y en la vida cultural de la época y su importancia se dejó sentir en la creación por el Estado de dos entidades oficiales: el Museo Pedagógico, surgido en 1882, y la Junta para la Ampliación de Estudios,

nacida algunos años después, en 1907, poseedoras ambas de un brillante historial en el mundo de la educación.

Pero la influencia de la Institución Libre de Enseñanza no cristalizó únicamente en estos dos organismos. A instancias suyas se crearon asimismo el Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudiantes, ambas en 1910, y poco después, en 1918, el Instituto Escuela. Las personas que desempeñaron su actividad en ellos contribuyeron a elevar su nivel hasta cotas excepcionales. Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Dámaso Alonso, Manuel Gómez Moreno, Claudio Sánchez Albornoz, son algunos de los nombres señeros que prestigieron el Centro de Estudios Históricos, mientras Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Salvador Dalí, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, y un largo etcétera de personalidades españolas y extranjeras, fueron huéspedes en algún momento de la Residencia de Estudiantes y dieron conferencias magistrales en ella.

En este repaso del tiempo hay una fecha que no puede pasar inadvertida por su importante significado: es el año 1900, que contempló la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que habría de asumir las competencias en materia de educación hasta entonces reservadas al Ministerio de Fomento. Al crear un ministerio específicamente encargado de la instrucción pública –como rezaba en su titulación- quedaba de manifiesto abiertamente la pretensión del gobierno de estatificar la enseñanza primaria, objetivo, por otra parte, que estará siempre presente a lo largo de la vigésima centuria³. Pero no

será hasta el advenimiento de la Segunda República, a impulsos de Marcelino Domingo, titular a la sazón de aquella cartera ministerial, y de su Director General de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, cuando se intente abordar desde la Administración una verdadera renovación pedagógica, orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a aumentar considerablemente el número de escuelas, a la vez que se elevaba la dignidad de los maestros preocupándose de su preparación profesional e incrementando sus retribuciones. No en balde Marcelino Domingo, fundador del Partido Republicano Radical Socialista, era un antiguo maestro y sus preferencias se orientaron claramente a potenciar la primera enseñanza. El Bachillerato y la Universidad ocuparon, por el contrario, un segundo plano. Hay que decir, sin embargo, en honor a la verdad, que muchos de los ambiciosos proyectos de este ministro no llegaron a cuajar en la práctica. Sirvan de ejemplo a este respecto el crecido número de escuelas por él creadas, que, de hecho, no funcionaron nunca. Pero uno de sus proyectos que sí se convirtió en realización fue el **Patronato de Misiones Pedagógicas**, creado en mayo de 1931 con el objetivo de acercar la educación a las poblaciones rurales, las más atrasadas del país, para elevar su nivel cultural, intencionalidad expresamente consignada en el decreto fundacional de dicho organismo. En el mismo se destacaba además el papel de apoyo a la misión del Patronato que debía corresponder a las bibliotecas populares cuyo número se pensaba incrementar. Y, en efecto, las estadísticas arrojan un total de más de diez mil pequeñas bibliotecas de unos 100 volúmenes cada una, creadas en cuatro años –de 1932 a 1935–, que dieron servicio a cerca de medio millón de lectores, balance altamente positivo que vino a compensar el esfuerzo económico realizado por el ministerio de Instrucción
Pública⁴. El Patronato sobrevivió, por tanto, al mandato ministerial de su creador, Marcelino Domingo, y tuvo una actividad fecunda durante los años mencionados.

En el decidido apoyo que este ministro prestó al mundo de las bibliotecas durante el corto período de tiempo que estuvo al frente de Instrucción Pública – apenas ocho meses del año 1931- tuvo, desde luego, mucha participación el equipo de hombres de su entorno, en especial el ya mencionado Rodolfo Llopis, su Director General de Primera Enseñanza, y Domingo Barnés, Subsecretario del Ministerio. La convicción de que «el camino para la renovación del país estaba en la escuela primaria»⁵ y de que la biblioteca era un medio tan necesario y eficaz como la propia escuela para elevar el nivel cultural del pueblo, era compartida por todos ellos. Fruto de este convencimiento fue el decreto promulgado el 7 de agosto de 1931 por el que se prescribía que en cada una de las escuelas primarias debía de haber una biblioteca, haciendo especial hincapié en las situadas en el ámbito rural. Y algunos días después, un nuevo decreto completaba y perfeccionaba el anterior al establecer que estas bibliotecas escolares habían de tener obligatoriamente un servicio de préstamo de libros, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los fondos bibliográficos y de facilitar el acceso a la lectura. Posteriormente, otro decreto de 21 de noviembre de 1931 –es decir, sólo unos días antes de que dimitiera Marcelino Domingo de sus funciones- creaba la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas, dando prueba, una vez más, del interés de su gabinete por estos centros. Nacía este nuevo organismo con una finalidad concreta: la de actualizar y modernizar los

⁵ Loc. cit., p. 31.
fondos de las bibliotecas, que se hallaban anticuados en bastantes casos. Y sólo después de algún tiempo de rodaje, asumió la Junta —cuya actividad se prolongó más de una década— la tarea de crear nuevas bibliotecas, objetivo no previsto en un principio.

En diciembre de 1931 cesaba Marcelino Domingo en el ministerio de Instrucción Pública y era sustituido por Fernando de los Ríos, hombre de gran capacidad, que conservó en sus cargos al equipo de colaboradores de su antecesor y continuó la labor iniciada por él en materia educativa, culminando muchos de los proyectos apenas iniciados o existentes sólo sobre el papel, mientras simultáneamente y como iniciativa personal, emprendía la tarea de renovar la enseñanza universitaria, en cuyo ámbito una de sus innovaciones a destacar fue la creación, en 1932, de una Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, lo cual entró en la consiguiente desaparición de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio que había desarrollado su actividad docente a lo largo de 23 años. Fernando de los Ríos se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública sólo unos días después de ser aprobada la Constitución republicana del 9 de diciembre de 1931, cuyo articulado establecía como obligatoria y gratuita la primera enseñanza, desde luego de carácter laico. Y su cese tuvo lugar en junio de 1933. Dos meses antes, en abril, había dimitido a su vez Rodolfo Llopis como Director General de Enseñanza Primaria. Con la desaparición administrativa de estas dos personas se cerraba una de las etapas más fructíferas en materia educativa en la historia de nuestro país: el bienio 1931-1933, etapa iniciada por Marcelino Domingo y continuada y culminada luego por la actuación de Fernando de los Ríos. Y aunque Marcelino
Domingo volvió luego a desempeñar el Ministerio de Instrucción Pública en febrero de 1936, cuando el triunfo del Frente Popular y siendo Manuel Azaña Presidente del Gobierno, la brevedad de este su segundo mandato —que duró apenas tres meses—, unida a la agitación política del momento, no le permitieron llevar a buen término el impulso que, fiel a sus principios, intentó dar nuevamente a la creación de escuelas, tal como había hecho en su anterior período de 1931.

Cuando en julio de 1936 se declara la Guerra Civil quizá hubiera podido pensarse, dentro de una lógica, que los dos bandos en lucha —el republicano y el nacionalista— se despreocuparían de toda cuestión ajena a lo estrictamente bélico. Pero no fue así. Lo cierto es que, tanto unos como otros contendientes, en medio de la dureza y penosidad inherentes a toda conflagración armada, no descuidaron atender en la medida de lo posible, la faceta cultural. Y, dentro de ella, la educación fue objeto de especial interés por ambas partes, aunque el enfoque ideológico fuera distinto en uno y otro bando. Ahora bien, los dos hicieron de la educación un instrumento de propaganda, considerándola «como el factor indispensable de la revolución» que cada uno por su lado pretendía realizar, a la vez que la tomaban como un medio para elevar la moral del soldado. Para el logro de este último objetivo, en la zona republicana se crearon las llamadas Milicias de la Cultura en enero de 1937, por iniciativa del entonces Ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández Tomás, activo comunista que, pese a carecer de estudios superiores, fue, sin embargo, el más destacado de los tres que se sucedieron en ese ministerio durante la contienda y el que más duró en el cargo:

6 La Educación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1936), p. 89.
desde septiembre de 1936 hasta abril del 38. Las Milicias encuadraban a un número de maestros que percibían una retribución especial por dar a los soldados, durante los momentos de descanso, una formación elemental y básica, ya que muchos eran analfabetos. Su labor produjo excelentes frutos pues contribuyó a disminuir notablemente el analfabetismo entre las tropas. Esa misma intención, pero dirigida en este caso hacia la población civil no combatiente, perseguía el ministro Jesús Hernández al crear en septiembre de 1937 las Brigadas Volantes, integradas esta vez no sólo por maestros sino por otros colectivos. Y aunque no se tienen cifras válidas que permitan valorar fiablemente el rendimiento de este servicio, los resultados conseguidos pueden calificarse de estimables. Complemento de esta labor alfabetizadora fue la creación de una serie de pequeñas bibliotecas llevada a cabo por la organización denominada Cultura Popular, destinadas tanto a los batallones que luchaban en el frente como a los Hogares del Soldado y los Hospitales de Sangre. De la aceptación con que fueron acogidas tales bibliotecas dan idea las palabras que aparecieron escritas en una revista de la época, en el sentido de que «los lugares más concurridos por los soldados en las trincheras son la biblioteca y la escuela»7. Y es que, indudablemente, el libro era el mejor medio de evasión anímica para contrarrestar los duros momentos de la lucha o los períodos de convalecencia hospitalaria.

La atención que las autoridades republicanas en guerra prestaron a la enseñanza primaria no tuvo una correspondencia análoga por lo que se refiere a la segunda enseñanza. Salvo las facilidades dadas a los trabajadores cuya edad

estuviese comprendida entre los 15 y los 35 años para seguir un *bachillerato reducido* de dos años y poder obtener así el título de Bachiller, y salvo la creación con esa misma finalidad y dirigida al mismo colectivo de otro *bachillerato intensivo* de cinco semestres –el primero de ellos de carácter preparatorio– que se impartirían en los cuatro *institutos Obreros* existentes –Valencia, Sabadell, Barcelona y Madrid– pocas fueron las disposiciones ministeriales en este campo. Pero aún hay más: al parecer, ninguno de los trabajadores que se matricularon en estas opciones finalizó los estudios y no se expidió, por tanto, ningún título por estos procedimientos. Y es que, en realidad, estas medidas fueron más de propaganda que de otra cosa.

En el terreno de las bibliotecas, la zona republicana llevó a cabo dos decisiones importantes: una, la de constituir en febrero de 1937 el organismo denominado *Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico*; y otra, la de diseñar un *Plan general de Bibliotecas*. Respecto a la primera de estas realizaciones, el Consejo nació para encargarse de reorganizar los servicios en los tres sectores que abarcaba su titulación, de gran importancia para la vida cultural, a fin de que pudieran cumplir mejor la elevada función social que tenían asignada. Un equipo de profesionales especializados integraba cada una de las tres secciones mencionadas. Y en la de Bibliotecas, *María Moliner Ruiz* –autora muchos años después del excelente *Diccionario de uso del español*– figuraba al frente de la subsección de Bibliotecas escolares. Su experiencia en este campo provenía de haber trabajado en las Misiones Pedagógicas. Bajo su tutela directa estuvieron desde entonces todas las bibliotecas que el Patronato de Misiones Pedagógicas había creado, las cuales pasaron a partir de entonces a depender
del nuevo Consejo de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Las estadísticas señalan que cuando estalló la guerra, las Misiones Pedagógicas habían creado más de cuatro mil pequeñas bibliotecas de cien volúmenes cada una, la mayor parte de ellas depositadas para su utilización en las escuelas⁸. En cuanto a la segunda de las realizaciones aludidas del bando republicano, el Plan general de bibliotecas, se trataba de una de las pocas planificaciones de este tipo hechas en nuestro país y, desde luego, la primera elaborada sobre la base de considerar como un todo único el conjunto de bibliotecas aunque diferenciando en ellas, como es lógico, distintas categorías o clases según la peculiaridad de sus diferentes funciones. Las escolares eran una de las categorías de bibliotecas contempladas en el Plan con apartado propio, y en él se regulaba tanto la naturaleza de los fondos que habían de tener como las cuestiones de régimen administrativo relativas a su gestión y funcionamiento. Quedaba especificado bien claramente que tales bibliotecas serían para uso exclusivo de las escuelas en las poblaciones de más de 1.000 habitantes que contasen ya, por tanto, con una biblioteca pública municipal, y en las que no llegaran a esta cifra tendrían la consideración de biblioteca rural y escolar a la vez, servida en cualquiera de estos casos por el maestro. Y en cuanto a los fondos bibliográficos que las integraran, debían ser los adecuados para satisfacer las necesidades tanto de los alumnos como de los maestros en el desempeño de sus tareas docentes.

---

Aparte la referencia concreta a las bibliotecas escolares, el Plan General de Bibliotecas era no sólo original y pionero en su punto de partida al considerar el conjunto de las bibliotecas integrando lo que hoy denominamos un 'sistema bibliotecario', sino que era tan ambicioso en sus objetivos que su aspiración declarada era la de diseñar una organización que permitiera a cualquier lector, en cualquier lugar, poder obtener cualquier libro que le interesara. El resultado final de la guerra dio al traste con esta elevada aspiración, la misma que muchos años después sería enarbolada por la IFLA, como base y fundamento de su programa DUP (Disponibilidad Universal de las Publicaciones), referida en esta ocasión a nivel mundial y no a escala nacional como era el objetivo del mencionado Plan de Bibliotecas republicano.

Pasando ahora a considerar cuál era el estado de la cuestión que nos ocupa en la llamada zona nacional, recordemos primeramente que dicha zona se hallaba regida por el general Francisco Franco como Jefe del gobierno y del ejército, con la cooperación de la Junta Técnica del Estado, formada por siete Comisiones una de las cuales era la de Cultura y Enseñanza, cuyo primer responsable fue el escritor y poeta José María Pemán. Extirpar todo rastro de la Institución Libre de Enseñanza por considerarla causante de los males que aquejaban a España, figuraba entre sus afanes prioritarios. Y otro de sus principales cometidos fue también el expurgo de libros que contuvieran ideas subversivas, opuestas a los principios defendidos por el Movimiento Nacional. Por contra, el problema de la alfabetización de adultos que tanto preocupó al bando republicano durante la guerra, no obtuvo el mismo interés en el nacionalista, que

---

9 Hipólito Escolar Sobrino, *La cultura durante la Guerra Civil*, p. 141.
se mostró más inclinado hacia el bachillerato y la enseñanza superior que a la promoción de la cultura popular\textsuperscript{10}. De ahí que las Milicias de la Cultura o las Brigadas Volantes de la zona republicana no tuvieran un parangón análogo en la zona nacional. Tan sólo pueden apuntarse algunas iniciativas en este sentido, como la creación del \textit{Servicio de Lecturas para el Marino} en enero de 1939, o las campañas de alfabetización para soldados convalecientes llevadas a cabo en los hospitales.

En el campo de las bibliotecas, la acción más destacada llevada a cabo por los nacionalistas fue la de crear, en octubre de 1938, los \textit{Patronatos Provinciales} para el fomento de las bibliotecas, archivos y museos. Además del gobernador civil de la provincia y del alcalde de la capital correspondiente, formaban parte de ellos un grupo de especialistas y profesionales en cada uno de los sectores que abarcaba su titulación. La vida de estos Patronatos, si bien rebasó el final de la contienda y se prolongó todavía por más de una década, no llegó a tener en realidad una actividad floreciente. Sin embargo, en su haber es justo destacar una nota relevante pues, aparte las tareas de inspección que tenían asignadas y que motivaron su creación, los Patronatos fueron los encargados de organizar la \textit{Fiesta del Libro}, instituida para la exaltación del libro y de los autores españoles, cuya celebración ha perdurado hasta nuestros días con notable éxito popular y

\textsuperscript{10} Las universidades interrumpieron su actividad, en uno y otro bando, durante la guerra. Pero en la zona nacional, una Orden de 4 de enero de 1937 disponía que el profesorado universitario quedaba obligado a prestar sus conocimientos en trabajos de investigación, cursos de conferencias y labores especializadas al servicio del Ejército. En tanto que en la zona republicana, la única actividad universitaria consistió en la organización de unos cursos breves de pocos días para los alumnos a quienes faltasen sólo algunas asignaturas para acabar sus carreras. Cf. \textit{La Educación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1936)}, p. 128; Hipólito Escolar, \textit{La cultura durante la Guerra Civil}, p. 92.
aceptación social\textsuperscript{11}. Javier Lasso de la Vega fue el promotor de los Patronatos Provinciales y de todas las disposiciones que se dieron en materia de bibliotecas en la zona nacional, como responsable que era de esta parcela dentro del Ministerio de Educación Nacional presidido por Pedro Sáinz Rodríguez. Competente e infatigable bibliotecario, autor de numerosos libros sobre la especialidad, Lasso de la Vega fue también el introductor en España de la Clasificación Decimal Universal, la CDU, cuyo uso se hizo obligatorio en nuestras bibliotecas mediante Decreto de finales de julio de 1939, es decir, poco tiempo después de terminada la guerra. En dicho decreto se ordenaba asimismo el empleo de la ficha única con encabezamiento variable para la redacción de catálogos, al tiempo que se adoptaba el tamaño internacional de las cédulas, fijado en 12,5x7,5 cm. Lasso de la Vega ostentó durante muchos años la dirección de la Biblioteca de la Universidad de Madrid, la actual Complutense. Y su pensamiento fue siempre el de lograr una estrecha colaboración entre los bibliotecarios y el estamento docente, persuadido de que las bibliotecas son el mayor apoyo y complemento de la enseñanza impartida en las aulas, y no sólo la de carácter universitario. Consecuente con esta idea, durante su mandato político en los años de la guerra, procuró hacerla realidad a nivel de bachillerato, dando en este sentido varias disposiciones para regular las bibliotecas de institutos.

Acabada la Guerra Civil, el Nuevo Régimen instaurado tras la victoria de los nacionalistas emprendió una política educativa basada en el amor a Dios y el servicio a la Patria como postulados fundamentales. En otras palabras, el sentimiento religioso y el sentimiento patriótico fueron los valores que impregnaron

\textsuperscript{11} Hipólito Escolar, \textit{La cultura durante la Guerra Civil}, p. 252-257.
la pedagogía de la nueva etapa histórica. Fácil es comprender, por consiguiente, el importante papel que jugó la Iglesia en el sistema educativo español como activa orientadora de la formación católica de los escolares. Síntesis de la renovación pedagógica que se pretendía impulsar fue la Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945, promulgada por el entonces ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, que lo sería también durante muchos años más. Aparte de establecer la obligatoriedad de los estudios primarios para todos los españoles, esta Ley consideraba beneficiosa la existencia de ciertas instituciones y actividades distintas de la propia escuela, las cuales contribuirían a completar la labor de la misma. Y, entre ellas, hacía expresa referencia a las bibliotecas infantiles, al tiempo que mencionaba además los campamentos y albergues, y los deportes, como instrumentos complementarios de la educación escolar. La misión del libro y de las bibliotecas hallaba eco, por tanto, en la nueva Ley. Y es que la falta de ambos elementos, libros y bibliotecas, era algo que venía dejándose sentir, y había sido ya denunciada por varios autores de la postguerra en sus escritos, con especial referencia al ámbito rural donde el problema adquiría mayor gravedad, pues una gran parte de los maestros que desarrollaban su labor en este medio tropezaban no sólo con la carencia de las obras más indispensables en sus centros escolares sino que se veían imposibilitados de subsanar esta falta por no haber biblioteca alguna en su localidad. De ahí que se sugiriese, como primera y urgente solución al problema, la de implantar un servicio

---

de bibliotecas circulantes, para luego, a más largo plazo, llegar a constituir en cada escuela una biblioteca. El texto de la Ley de Educación Primaria de 1945 que hemos mencionado recogía en su articulado la primera de las soluciones indicadas y, en consecuencia, contemplaba la existencia de una serie de bibliotecas circulantes como parte de la actividad encomendada a las Misiones Pedagógicas que ahora se creaban para extender la cultura a los medios rurales, distintas de las Misiones de orientación pedagógica que ya estaban en funcionamiento.

Desde 1945 acá han pasado más de cincuenta años durante los cuales se han sucedido diferentes reformas educativas y también distintos planes de bibliotecas, elaborados bien por la Administración Central o bien por las Autonómicas. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las iniciativas emprendidas, el problema de las bibliotecas escolares sigue en pie, sin solución adecuada y definitiva. Y lo que es peor: como hemos apuntado al principio, incluso se ha llegado a negar la existencia de este tipo de bibliotecas en España, pues las 600 que contabilizaba hace algunos años un conocido bibliotecario, con dos millones de volúmenes en total, en su opinión eran sólo «meras colecciones de libros, más o menos numerosas, sin bibliotecario responsable de sus servicios».

La comparación con otros países, próximos o alejados, agrava más aún, si cabe, el panorama de la situación española en esta esfera pues revela, por ejemplo, que en Dinamarca y Suecia es preceptivo que todas las escuelas tengan su correspondiente biblioteca; que en los Estados Unidos hay 70.000 bibliotecas.

---

escolares, con más de 500 millones de libros, reguladas por unas excelentes normas *ad hoc*, las *Standards for Schools Library Programs*, que datan de 1960; y que Canadá, por su parte, cuenta con 9.000 de tales bibliotecas, las cuales totalizan 50 millones de libros. Y así podríamos seguir citando ejemplos, pero basten los apuntados para denotar el desfase existente en nuestro país con respecto a este tipo de bibliotecas\(^{15}\). Sin embargo, no obstante lo expuesto, y a fuer de ser optimistas, el remedio puede que no esté lejos. Algunas esperanzas hacen concebir las recientes iniciativas que, a modo de experiencias piloto, vienen desarrollándose desde hace unos años en las localidades que señalábamos al comienzo. Y hasta es posible que estemos ante el despertar en España de una concienciación colectiva en pro de las bibliotecas escolares, que valore debidamente su papel de «instrumento imprescindible para la formación de niños y jóvenes en la actual sociedad de la información»\(^{16}\). Reconocer en ellas este carácter valdría tanto como aceptar que «la biblioteca escolar es la piedra angular o el corazón de la escuela», según definición de una distinguida colega\(^{17}\).

La IFLA, desde luego, viene laborando en este sentido, a escala mundial, desde hace más de veinte años, a través de su *Sección de Bibliotecas Escolares*, creada en 1977 y reconvertida en *Sección de Bibliotecas y Centros de Recursos Escolares*, como ha pasado a denominarse recientemente. Su actividad se ha hecho patente en las sucesivas Conferencias Anuales de la IFLA donde se han

\(^{15}\) *Loc. cit.*, p. 421.


\(^{17}\) Anne Galler, «La biblioteca escolar en el siglo XXI», en *Educación y Biblioteca*, año 11, nº 104 (sept. 1999), p. 25.
expuesto y debatido múltiples cuestiones bibliotecarias contempladas desde la óptica escolar, tales como la figura del bibliotecario de estos centros, la formación de usuarios, la función de las nuevas tecnologías en la biblioteca escolar, y otras de análoga índole. Al mismo tiempo, la referida Sección ha polarizado también su actividad hacia la publicación de una serie de obras básicas en este campo, escritas por diferentes autores. Y así, bajo su patrocinio, han aparecido en los últimos años interesantes trabajos que contienen directrices y líneas generales relativas a la organización de las bibliotecas escolares y a la formación de los profesionales que las desempeñan\(^8\). Ahora bien, tales trabajos han sido superados hoy por la publicación de un documento fundamental, concienzuda y laboriosamente redactado por la IFLA a lo largo de cinco años, y que fue ratificado por la UNESCO a finales de 1998. Nos estamos refiriendo al *Manifiesto de la Biblioteca Escolar* que es, en síntesis, la expresión de la filosofía de ambos organismos internacionales, IFLA y UNESCO, acerca de la naturaleza, funciones y organización de tales centros. Al estilo de todos los documentos emanados de la IFLA para su implantación y utilización a nivel mundial, contiene una serie de normas de carácter general relativas, en este caso, a las bibliotecas escolares, las cuales deberá desarrollar luego cada país adaptándolas a sus particulares características y necesidades. Comienza el *Manifiesto* definiendo cuál es la misión que corresponde desempeñar a la biblioteca escolar en el proceso educativo para seguir, a continuación, con los principios y directrices que habrán de regular su financiación, status jurídico, objetivos, funciones, personal y demás aspectos.

organizativos y de gestión\textsuperscript{19}. Y todo ello, dentro de una gran flexibilidad que permita su adecuación a la variopinta diversidad de países que conforman nuestro planeta.

Es de predecir que el efecto producido por el Manifiesto de la IFLA será altamente beneficioso para el renacer de las bibliotecas escolares cuando su implantación se halle generalizada a nivel mundial, ya que insta a los gobiernos a elaborar su propia política en este campo, tendente a desarrollar los principios y normas contenidos en el documento. De ahí que el optimismo haya calado en bastantes profesionales hasta el punto de que preven para el siglo XXI un renacimiento de la biblioteca escolar\textsuperscript{20}. Particularmente deseo compartir este mismo optimismo por lo que a España se refiere. Ojalá que el futuro no nos defraude.

\textsuperscript{19} Vid. la versión española provisional del Manifiesto en \textit{Educación y Biblioteca}, año 11, nº 102 (junio 1999), pp. 19-20.